

- Soares, Gláucio Ary Dillon. 1967. "Brasil: A Política do Desenvolvimento Desigual". *Revista Brasileira de Estudos Políticos* 22 (Enero).
- Soares, Gláucio Ary Dillon. 1973. *Sociedade e Política no Brasil*. São Paulo: Difusão Européia do Livro.
- Soares, Gláucio Ary Dillon. 1982. "El sistema político brasileño: nuevos partidos y viejas divisiones". *Revista Mexicana de Sociología* 4 (3; julio-septiembre).
- Souza, Amaury de. 1978. "The Nature of Corporatist Representation: Leaders and Members of Organized Labor in Brazil". Ph.D. Diss.: Cornell University.
- Souza, Maria do Carmo Campello de. 1976. *Estado e Partidos Políticos no Brasil (1930 a 1964)*. São Paulo: Alfa Omega.
- Stepan, Alfred C. 1978b. *The State and Society: Peru in Comparative Perspective*. Princeton: Princeton University Press.
- Suleiman, Ezra N. 1994. "Presidentialism and Political Stability in France". En *The Failure of Presidential Democracy, Vol. 1, Comparative Perspectives*, Juan J. Linz y Arturo Valenzuela (eds.). Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Valenzuela, J. Samuel. 1995. "The Origins and Transformations of the Chilean Party System". University of Notre Dame, Kellogg Institute for International Studies, Working Paper 215 (Diciembre).
- Von Mettenheim, Kurt. 1995. *The Brazilian Voter: Mass Politics in Democratic Transition, 1974-1986*. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.
- Weyland, Kurt. 1978. *O Populismo na Política Brasileira*. Rio de Janeiro: Paz e Terra.
- Weyland, Kurt. 1996a. *Democracy without Equity: Failures of Reform in Brazil*. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.
- Weyland, Kurt. 1996b. "How Much Political Power do Economic Forces Have? Conflicts over Social Insurance reform in Brazil". *Journal of Public Policy* 16 (1).
- White, Stephen, Richard Rose y Ian McAllister. 1997. *How Russia Votes*. Chatham: Chatham House.
- Yashar, Deborah J. 1995. "Civil War and Social Welfare: The Origins of Costa Rica's Competitive Party System". En *Building Democratic Institutions: Party Systems in Latin America*, Scott Mainwaring y Timothy R. Scully. (eds.). Stanford: Stanford University Press.
- Zuckerman, Alan. 1975. "Political Cleavage: A Conceptual and Theoretical Analysis". *British Journal of Political Sciences* 5 (2).

Desafiando al neoliberalismo en América Latina

Eduardo Silva¹

El surgimiento de movilizaciones masivas en rechazo del neoliberalismo durante la década del 90 y a comienzos de la década del 2000 en Sudamérica representó un desafío para el esfuerzo de un cuarto de siglo por construir un nuevo orden liberal, basado en una economía de libre mercado, reformas sociales y una democracia liberal; un proceso que, hasta el último tiempo parecía ser irreversible o, al menos, hegemónico.² Dichos movimientos contribuyeron a la caída de gobiernos comprometidos incondicionalmente con el neoliberalismo y ayudó a que las fuerzas políticas de centroizquierda, partidarios de esta reforma –“la marea rosa”– ganaran poder político en más países sudamericanos.³ La literatura dominante en América Latina carecía de las argumentaciones para explicar este cambio y la función que los movimientos y las movilizaciones sociales masivas cumplían en él. Se negó o restó importancia a gran parte del trabajo realizado durante la democratización y el ajuste al libre mercado. La desmovilización era la norma después de la democratización o la desindustrialización, por lo que los movimientos de la clase trabajadora se consideraban irrelevantes. La creciente literatura sobre la consolidación de la democracia liberal, de la economía de libre mercado y de las reformas sociales

1 Este artículo fue preparado por Eduardo Silva el año 2007 para el Congress of the Latin American Studies Association en Montreal, Canadá.

2 Existía un amplio consenso en la élite de que estas reformas eran la fórmula para restablecer el crecimiento económico y la estabilidad política luego de la década perdida de los 80. Para más información sobre el liberalismo global bajo la hegemonía de Estados Unidos y las reacciones ante este, véase Arrighi y Silver (1999) y Silver (2003).

3 Aunque el alcance del cambio desde una forma neoliberal del capitalismo democrático en América Latina sigue siendo incierto, las fuerzas políticas y sociales buscan construir una variedad distinta de capitalismo democrático que se ha transformado en un factor que se debe tener en cuenta en Argentina, Brasil, Bolivia, Uruguay, Venezuela y Ecuador.

reconocía los disturbios sociales –donde los manifestantes aparecieron como una muchedumbre “populista” sin diferencias–, pero los atribuía a un error de la gobernanza que podría resolverse mediante un diseño institucional adecuado. Aunque los estudios subalternos consideraron a los manifestantes como sujetos sociales, analizaron los movimientos individualmente, como movimientos obreros, de género, étnicos y culturales. No pudieron comprender cuáles eran las fuerzas que impulsaron a estas personas a ser una parte importante de la política nacional e internacional.

Entonces, ¿dónde yacen las condiciones que generaron los movimientos contra el neoliberalismo, especialmente en las movilizaciones masivas en Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela durante los años 90 y comienzos del 2000? Un punto de partida es comprender la lógica sociopolítica que aquellas reformas establecieron. En este punto, el trabajo de Karl Polanyi ha llamado cada vez más la atención, en especial su concepto de sociedad de mercado, un orden que subordina las instituciones políticas y sociales a los principios de la economía de mercado. Polanyi señala que los esfuerzos para construir una sociedad de mercado generan, inevitablemente, una reacción de las fuerzas sociales para protegerse del mercado. Sin embargo, para toda la atención que ha generado su trabajo, que es poca, si es que la ha habido, existen análisis sistemáticos basados en su hipótesis.⁴ Entonces, según los conceptos centrales de Polanyi, si las reformas económicas, sociales y políticas neoliberales sirven para la construcción de una sociedad de mercado en América Latina, las últimas movilizaciones masivas constituyen una reacción defensiva, similar a las que él señala, de los grupos sociales subordinados a ese proyecto.

No obstante, explicar las demandas no da cuenta de por qué surge una movilización masiva a nivel nacional. ¿Cómo pudieron fuerzas sociales subordinadas, que en un comienzo se encontraban desorganizadas, aisladas y eran ineficaces, responder a los desafíos que planteaban las fuerzas neoliberales que parecían ser tan dominantes? La pregunta requiere una revisión de las relaciones de poder teorizadas por Polanyi.⁵ Basándose en los trabajos de Rueschemeyer, Stephens y Stephens, Michael Mann y Beverley Silver, en este artículo se sostiene que las modificaciones en cuatro clústeres de poder interconectados –las clases sociales, la política, las fuerzas armadas y las redes

4 Polanyi (1957); Topick (2001); y Block (2003).

5 Polanyi solo argumentó que el poder del Estado cumplía una función importante en la construcción de la sociedad de mercado.

transnacionales– explican el cambio.⁶ Las fuerzas que respaldaban el proyecto neoliberal sufrieron profundas bajas en clústeres de poder de la economía transnacional y nacional, la política nacional y, en algunos casos, las fuerzas armadas. Por el contrario, los grupos sociales subordinados se beneficiaron de importantes aumentos en el poder colectivo y disruptivo –que son formas de poder de clase para las fuerzas sociales subordinadas–; de igual forma, en algunos casos, obtuvieron el apoyo de poderes políticos y clústeres militares.

Sociedad de mercado, poder y ciclos de contención en América Latina

Las movilizaciones masivas a nivel nacional surgieron en Argentina en diciembre de 2001, en Bolivia entre septiembre y octubre de 2003, en Ecuador en enero del 2000 y en Venezuela desde febrero de 1989 hasta noviembre de 1992, lo que creó preocupaciones sobre la consolidación de las reformas y la democracia de mercado. Más que el levantamiento de las masas, la aparición de estas manifestaciones representó una serie de preguntas clave. ¿Quiénes eran los participantes, qué querían, cómo caracterizaban la movilización en la que participaban? ¿Por qué se producían estas movilizaciones y qué importancia tienen para la política en América Latina?

Los estudios subalternos que ponen énfasis en las políticas de identidad y los estudios de la clase obrera y campesina son marcos teóricos útiles para construir una respuesta a estas preguntas respecto de los participantes. Proporcionan una explicación detallada de los orígenes, la organización y las demandas.⁷ Sin embargo, no explican las condiciones en las que estos movimientos se vinculan, por lo que amplían el alcance y el impacto. Aun así, algunos estudios intentan definir el problema señalando que las fuerzas que impulsaron las movilizaciones masivas no coinciden con las estrechas definiciones del movimiento. Otros exageran el alcance, argumentando que las políticas de identidad han sobrepasado las acciones basadas en el interés material (Slater 1994).

La corriente de la “política contenciosa” en la literatura de los movimientos sociales resuelve algunas de estas limitaciones. Al centrarse en las acciones conflictivas, definidas como desafíos públicos para la autoridad impuestos por actores políticamente constituidos, aborda la importancia política de las

6 Rueschemeyer, Stephens y Stephens (1992); Mann (1986 y 1993); y Silver (1999).

7 Las políticas de identidad dieron paso a temas como el género, la cultura y la etnia, véase Eckstein y Wickham-Crowley (2003).

manifestaciones. Es importante investigar las verdaderas demandas, en lugar de suponer solo ciertos tipos. Además, examinar los vínculos entre movimientos también es parte central de este enfoque. Según esta literatura, las últimas movilizaciones masivas en América Latina se pueden conceptualizar como ciclos de política contenciosa.⁸ Estos se refieren a los procesos de expansión de las movilizaciones en los que el éxito de los primeros manifestantes motivó a otros a unirse, lo que generó olas de movilización masiva a nivel nacional. Solamente la falta de diversas soberanías –poderes autónomos que compitan por el control del Estado– distingue los ciclos de confrontación de las revoluciones (Tarrow 1998: 24-25). Este enfoque facilita el análisis de gran parte de los movimientos implicados, sus características sociales, su organización y sus demandas.

Los ciclos de política contenciosa que sacudieron Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela constituyeron grandes desafíos para el neoliberalismo. Las demandas se centraron en problemas redistributivos –servicios y protección social– y cuestionaron ampliamente los derechos de propiedad privada, presionando para que el Estado tuviera una participación más activa en la economía y en la sociedad. Estas demandas se entrecruzaron con las demandas por autonomía y derechos ciudadanos, al igual que con las manifestaciones de toda la sociedad contra la corrupción política. Entre los grupos movilizados estaban los movimientos indígenas, los nuevos partidos políticos y sindicatos, al igual que las organizaciones de desempleados y pensionistas recientemente formadas –las cuales se unieron a los movimientos sindicales y partidos políticos más tradicionales–, y los movimientos de clase media. En estos casos, los ciclos de política contenciosa también tienen consecuencias similares. Derrocaron gobiernos que apoyaban incondicionalmente el neoliberalismo y contribuyeron a su remplazo con liderazgos políticos que, en un principio, buscaban reformarlo. ¿Qué explica el surgimiento de estos ciclos que demandan una reforma de la democracia liberal y de la economía de mercado?

Sociedad de mercado y ciclos de política contenciosa

La literatura dominante sobre el cambio en la política de América Latina, que desde mediados de la década del 80 se centra en las condiciones necesarias para establecer y consolidar una economía de libre mercado, reformas

8 Traducimos *cycles of contention* como "ciclos de política contenciosa", Tarrow (1998); Tilly (2004).

sociales y una democracia liberal, sirve de poco para explicar los últimos ciclos de política contenciosa.⁹ De hecho, el surgimiento de estos ciclos de protesta generó interrogantes que la literatura no podía responder, dado que no reconocía la posibilidad de que se dieran movilizaciones políticamente importantes o bien que sus demandas fuesen legítimas. Por ejemplo, una de las corrientes teóricas argumentaba arduamente contra la posibilidad de que se diera una movilización masiva políticamente significativa. Los estudios se centraban en los fenómenos de la desmovilización posterior a la democratización, fomentados activamente por los principales partidos políticos que conducían las transiciones democráticas. Otros estudios sostenían que el debilitamiento de los movimientos obreros y campesinos, debido a la desindustrialización y globalización, dictó el fin de las movilizaciones masivas basadas en demandas materiales. Además, las demandas por derechos culturales y ciudadanos de los movimientos basados en la identidad de las personas fueron percibidos como compatibles con la democracia liberal y las reformas económicas neoliberales.¹⁰

Durante los años 90, los investigadores se dieron cuenta de que la manifestación del descontento político y social en forma de crimen y desorden público constituía una amenaza para la consolidación de las reformas económicas neoliberales y la democracia liberal. Esta literatura sostenía que la insuficiencia institucional era la explicación a las dificultades que mostraban las sociedades, incluyendo el desarrollo de estructuras de autoridad clientelares, la falta de un Estado de derecho, la corrupción política, partidos y sistemas de partidos débiles, un desempeño económico insuficiente y la pobreza extrema. Esto fomentó la desintegración social y el descontento que sirvió de apoyo para los populistas nacionales de tiempos anteriores, el flagelo de una buena gobernanza. Este planteamiento no reconoció a los manifestantes como actores sociales con demandas legítimas; solo constituían una muchedumbre que amenazaba al orden establecido, porque sus líderes no eran leales a él. La consolidación de este orden necesitaba un diseño y solidez institucional apropiados. Las instituciones de mercado necesitaban un afinamiento; la democracia necesitaba instituciones para un buen gobierno; y la

9 Edwards (1995); Diamond (1999); Tulchin y Graham (2000). Para un trabajo más orientado a la teoría en búsqueda de una explicación de los cambios políticos y económicos de la década de los 80 y los 90, véase Haggard y Kaufman (1995).

10 Para más información sobre la desmovilización y el deterioro de los movimientos obreros y campesinos, véase Foweraker y Kurtz (2004); Garretón et al. (2003); O'Donnell y Schmitter (1986).

asistencia social, la educación y las políticas de salud debían estar orientadas hacia los grupos sociales más necesitados.¹¹

Sin embargo, la esperanza de la literatura dominante en un diseño institucional para contener la tensión social y los conflictos cada vez mayores en contra de las reformas neoliberales ignora que las instituciones son construcciones sociales que cristalizan las relaciones de dominación y subordinación en la sociedad (Weber 1978). Por lo tanto, omite que las desigualdades generadas por las instituciones que defienden, fomentan las demandas de las movilizaciones masivas y que estos ciclos de contención constituyen una presión políticamente importante y organizada para reformar el capitalismo neoliberal y la democracia liberal.¹²

El inquebrantable compromiso de subordinar la economía, la política y la organización social a los principios de mercado durante los últimos 25 años generó un resurgimiento en el interés por el concepto de Karl Polanyi sobre la sociedad de mercado y el doble movimiento de la sociedad capitalista. Polanyi, quien analizó la expansión de la economía de mercado en el siglo XIX, sostenía que la construcción de la sociedad de mercado generó su propia oposición. La sociedad de mercado intentó poner todas las relaciones sociales, expresadas en capital, tierras y mano de obra, bajo los principios de intercambio y eficiencia del mercado (en aras de la producción y la ganancia). Además, organizó las instituciones políticas y sociales de forma que respaldaran las relaciones de mercado en la economía. Los regímenes políticos democráticos liberales estructuraron las instituciones estatales y orientaron las políticas hacia el respaldo de los derechos de propiedad privada, el libre comercio y las tasas de interés y de tipo de cambio fijas. El Estado también garantizaba que los esquemas del mercado laboral y del seguro social permanecieran sin distorsiones que impidieran la flexibilidad y la eficiencia económica.

Polanyi señaló que la sociedad de mercado no puede ser la base para un orden social estable y justo, dado que genera tensiones sociales que inevitablemente llevan a las personas y a la sociedad a buscar protección contra el poder destructivo del mercado. La sociedad de mercado busca reducir al ser humano a una dimensión: ser un producto. La mercantilización de la mano de obra y

la tierra perjudica la capacidad de las personas para satisfacer sus necesidades vitales, como la estabilidad económica personal, el mantenimiento del estatus en la comunidad y la satisfacción de un sentido de justicia. Por consiguiente, las personas inevitablemente buscan protegerse a sí mismas de los poderes de mercados impersonales, impredecibles, constantemente en cambio y frecuentemente destructivos. Tomando en cuenta la lógica de estas relaciones, Polanyi teorizó un doble movimiento en la sociedad capitalista, donde la construcción de la sociedad de mercado generaba un movimiento opuesto, proteccionista, dentro de la sociedad.

Según estos conceptos, es bueno pensar que 25 años de reformas económicas, sociales y políticas orientadas al libre mercado en América Latina construyeron un orden lo suficientemente similar a la sociedad de mercado de Polanyi.¹³ Las reformas neoliberales buscaban subordinar las estructuras políticas y sociales a las necesidades de una economía impulsada por los principios del libre mercado. Desde el punto de vista económico, la arremetida contra el modelo de desarrollo nacional populista, basado en la sustitución de importaciones, los derechos laborales y un Estado de bienestar, comenzó a mediados de los años 70 –en el Cono Sur– y se aceleró tras la crisis de la deuda latinoamericana a comienzos de los 80. Después de un período de estabilización fiscal para lidiar con la crisis de la deuda, las reformas estructurales en América Latina de la primera etapa se concentraron en la liberación económica de las finanzas y las inversiones, el comercio y la agricultura, con un énfasis en la inversión privada extranjera y la privatización de las empresas públicas. También se crearon presupuestos equilibrados, políticas de restricción fiscal y monetaria –para controlar la inflación–, tasas de tipo de cambio unitarias y fijas, y una flexibilización de las relaciones laborales. En tanto, durante la segunda etapa las reformas neoliberales reestructuraron las instituciones del sector social. Se centraron en la salud, la educación, las pensiones y otros programas de asistencia social. Las políticas enfatizaron la privatización de los servicios, la descentralización y la evaluación de medios económicos, en oposición a una cobertura universal. Todas traspasaron la administración del riesgo a las personas. Los sistemas públicos reestructurados se centraron en prestar servicios sociales básicos a los pobres,

11 Para un práctico resumen de estas visiones, véase Kuczynski y Williamson (2003).

12 Esta reacción fue análoga a la expansión global del capital durante el siglo XIX (hasta 1914). Deborah Yashar reconoció el potencial conflicto en relación al remplazo del corporativismo con los derechos civiles de las personas y las movilizaciones indígenas (Yashar 1999).

13 Steve Topick también sostiene que el neoliberalismo en América Latina contribuyó a la construcción de una sociedad de mercado. Sin embargo, su visión era mostrar que no era un fenómeno "natural" y que el Estado juega un papel importante en su creación (Topick 1999).

con el objetivo de llegar a los focos de pobreza mediante programas especiales (redes de protección focalizada).¹⁴

El establecimiento y la consolidación de la democracia liberal y la reforma de las instituciones estatales fueron el corolario político para las reformas económicas neoliberales. La democracia liberal en América Latina llevó a un pequeño gobierno estructurado para respaldar la agenda económica y social neoliberal, en especial la protección de los derechos de propiedad privada. Por razones políticas y pragmáticas, el consenso entre las élites políticas para crear reformas neoliberales significó que los temas de redistribución y mayor participación del Estado en el desarrollo económico y social estaban simplemente fuera de la agenda política. No obstante, la democracia liberal también promovió los derechos ciudadanos universales para las personas.¹⁵

Sin embargo, no se puede simplemente suponer que, dado que el orden neoliberal en la América Latina contemporánea es similar a la sociedad de mercado, se siga una lógica de resistencia. Se debe demostrar que los ciclos de política contenciosa en Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela fueron esfuerzos de protección ante la sociedad de mercado. Beverley Silver desarrolló un indicador práctico, basándose en los argumentos de Polanyi. Si la expansión del capitalismo de mercado de regulación automática destruyó las instituciones sociales que contribuían al sustento y si las personas afectadas por este proceso —que experimentaron exclusión e injusticia— buscaron naturalmente defensas contra dicha expansión, entonces las movilizaciones propuestas por Polanyi deben suponer “resistencias opuestas a la expansión de un mercado global de regulación automática”, ya sea porque los sustentos desaparecen mediante el desempleo y el subempleo o porque los gobiernos abandonaron los pactos sociales de los que la gente dependía para mantener un sustento, o ambos.

Pero el estudio de las demandas por protección no debe enfocarse exclusivamente en las reclamaciones económicas (Wolf 1999: 282; Silver 2003: 18-20). La sociedad de mercado neoliberal en América Latina también implicó un intento por subordinar la política —el Estado— y gran parte de otras formas de interacción social —la sociedad— a los principios de mercado. Por lo tanto, en el intento por mantener o restaurar los sustentos, el estatus y su significado

14 Para obtener un breve resumen de las reformas de la primera etapa, véase Edwards. Para las reformas de la segunda etapa, véase Grindle (2002); Raczynsky (1998); Gerstenfeld (2002).

15 Para conocer más sobre los derechos ciudadanos, véase Roberts (2005).

para la vida, las movilizaciones contra el neoliberalismo también incluyeron demandas que buscaban la protección, la reinstauración o incluso la propuesta de nuevas instituciones políticas y socioculturales.

Poder y ciclos de política contenciosa

Si los ciclos de política contenciosa en Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela hubiesen sido reacciones defensivas contra el establecimiento de un orden neoliberal similares a las que establece Polanyi, ¿qué explica este surgimiento, teniendo en cuenta que las fuerzas sociales que participaron en ellas parecían ser, hasta hace poco, tan indefensas? Los estudios anteriores sobre los movimientos en América Latina analizaron por igual las confrontaciones entre los movimientos sociales y el Estado y de esta forma limitaron su impacto. Algunos de los últimos estudios han descrito las movilizaciones masivas, sin teorizar sus orígenes o impacto (Assies y Salman 2003; Burt y Mauceri 2004). Sin embargo, pensar sobre el poder de los ciclos de las movilizaciones en términos relacionales permite obtener un punto de partida eficaz para responder a esta pregunta, dado que implica un debilitamiento de las fuerzas que apoyan el orden establecido y el fortalecimiento de los movimientos y sus aliados.

Entonces, ¿cuáles son sus fuentes de poder?¹⁶ El trabajo de Rueschemeyer, Stephens y Stephens propone un marco teórico basado en cuatro clústeres de poder interconectados: clase, Estado, redes transnacionales y fuerzas armadas.¹⁷ Los primeros tres se basan en las estructuras económicas, estatales e internacionales del capitalismo. Dada la tendencia de las fuerzas armadas en América Latina a actuar de manera autónoma, pueden considerarse como una fuente de poder por separado. Por lo tanto, la estabilidad de un orden depende de reforzar las interconexiones entre estos clústeres de poder; si no existe u ocurre un cambio en la relación de estos factores, puede estallar un ciclo de política contenciosa.

16 La literatura sobre las movilizaciones sociales y la revolución entrega conceptos prácticos. Sin embargo, la primera se centraba en el poder de los movimientos sin considerar sistemáticamente un cambio de poder en el orden establecido, que aparece de manera epifenomenal como cambios en la estructura de la oportunidad política. Véase Tarrow, McAdam, McCarthy y Zald (1996). En tanto, los estudios de la revolución examinan el poder en el orden establecido, pero tienden a limitar su atención en el Estado, restándole importancia a las clases dominantes. Véase Skocpol (1979) y Goodwin (2001).

17 Rueschemeyer, Stephens y Stephens (1992); Mann volúmenes 1 y 2 (1986). Mann también sostiene una fuente ideológica de poder que aquí no se considera, dado que las fuentes materiales parecen ser suficientes para explicar la movilización.

Dado que el neoliberalismo transfiere poder desde el Estado al mercado, lo recomendable es comenzar con las fuentes económicas y organizativas del poder de las clases sociales. A partir de Marx, Mann sostiene que el poder económico depende de la posesión eficiente de recursos económicos (Mann 1986, 26). En las economías de mercado, el poder económico de diversos grupos de propietarios de capital y tierras –las clases dominantes– permanece junto al control de la producción, la distribución y el intercambio de recursos económicos. El mercado –y, por lo tanto, las clases sociales dominantes– controla o “encierra” a los trabajadores, al envolverlos en una red de relaciones sociales –la disciplina de mercado y empleo– de la cual dependen para vivir. Desde luego, tal como demostró Peter Gourevitch recientemente, el ejercicio eficiente de este poder depende en gran medida de la creación de empleos e inversiones a través del crecimiento económico (1986). Las crisis económicas y la inestabilidad prolongada que causaron los cambios en la estructura y el dinamismo de la economía mundial, la economía nacional, o ambas, debilitaron la influencia del empleador sobre los trabajadores debido a que el mercado ya no ofrece expectativas creíbles para ganarse el sustento. Los grupos sociales se movilizan a favor de otras alternativas.

El poder de las clases subordinadas –trabajadores urbanos y rurales, campesinos y la clase media– yace en su capacidad organizativa y en el grado de asociación o coalición que se construye entre las organizaciones. Históricamente, como han señalado Rueschemeyer, Stephens y Stephens, esto implica la sindicalización de los trabajadores urbanos y rurales, y la formación de los partidos de trabajadores. Según Beverly Silver, luego del desenvolvimiento que tuvo el sistema de producción fordista, la organización comunitaria emergió como una herramienta organizativa eficiente para los trabajadores semicapacitados y no capacitados, que en América Latina están estrechamente asociados con el sector informal. Muy por el contrario a las clases dominantes, el poder económico de las clases subordinadas recae en gran medida en la capacidad de acciones disruptivas, ya fuesen efectivas o amenazas.¹⁸ Desde luego, los movimientos sociales no siempre siguen las líneas de clase. Michael Mann vincula la brecha entre las políticas de clase e identidad (1983: 28). Sostiene que los movimientos de clases nunca son puros, dado que mezclan intereses que no son económicos. Esto se adecúa perfectamente a la situación de los

18 Véase Rueschemeyer, Stephens y Stephens (1992); Silver (1999); y véase Tarrow (1998) para más información sobre acciones disruptivas.

movimientos indígenas en América Latina. Mezclan las formas de organización basadas en las clases y en la cultura. De esta manera, sus demandas se centran en peticiones económicas de larga duración, al igual que en derechos culturales y étnicos.

Según Mann, el poder político se refiere principalmente al poder del Estado, que está arraigado en la centralización de la regulación territorial (1986: 9). Tiene una dimensión interna o nacional y otra más externa o geopolítica. Para comenzar, el poder del Estado depende de su capacidad para realizar funciones críticas de economía, prestaciones sociales y de gobierno (incluido el aspecto representativo).¹⁹ El no poder cumplir estas funciones reduce el poder del Estado; de esta manera pierde instrumentos de control social, por lo que se producen las movilizaciones sociales. Dado que los Estados también son campos en los que las fuerzas sociales luchan por el control o por respaldo para sus instituciones, a fin de aumentar sus intereses, la estructura de articulación de los intereses –las instituciones que vinculan los grupos sociales con el Estado– juega un papel clave en el poder del Estado y los actores sociales relativos. El poder de los estados democráticos –el tema central de este capítulo– depende parcialmente del grado en que los ciudadanos participan ampliamente en elecciones a través de los partidos políticos establecidos y de los medios efectivos que tienen para interactuar directamente con el poder ejecutivo (Haggard y Kaufman 1995; Levitsky 2005). Cuando los estados democráticos realizan sus funciones económicas, de bienestar social y representativas de manera deficiente –cuando una gran cantidad de actores, sin importar sus condiciones, no cuentan con representación ni acceso–, los sistemas de partidos pueden colapsar, lo que fomenta las condiciones para las extensas movilizaciones sociales.

Max Weber señaló que gran parte del poder del Estado moderno depende del control de las fuentes de poder coercitivo, las fuerzas militares –y la policía– y su capacidad para controlar el territorio del Estado. Pero, ¿qué sucede si no es así? La conceptualización de las fuerzas militares de Mann como una posible fuente de poder independiente, cuyos aliados son esenciales para desarrollar las capacidades

19 Weber y muchos de sus seguidores sostienen que gran parte del poder del Estado depende de su organización administrativa para gobernar y que las élites del Estado tienen autonomía de los grupos sociales para tomar decisiones. Sin embargo, este documento no aborda estos factores porque otras fuentes del poder del Estado juegan un papel más inmediato. Para conocer una interpretación funcional del Estado en América Latina, véase Anglade y Fortín (1985). Irónicamente, la literatura sobre democratización también reconoce la importancia de las funciones representativas y de rendimiento económico.

de otros actores de poder, parece especialmente relevante en América Latina (Weber 1978; Mann 1986). En esta región, las fuerzas armadas frecuentemente actúan de manera independiente a los civiles que controlan el Estado políticamente. Si las fuerzas armadas —o una parte importante dentro de ellas— apoyan a los grupos sociales subalternos, aquello definitivamente aumentará su poder.

Sin embargo, las clases sociales, el Estado y el poder de las fuerzas armadas no son suficientes para explicar los ciclos de política contenciosa, especialmente en el mundo en vías de desarrollo. Rueschemeyer, Stephens y Stephens y Mann señalan que el poder de las clases sociales y del Estado tienen una fuerte dimensión transnacional arraigada en la estructura del sistema estatal y en la economía política internacional.²⁰ Los Estados dominantes, las instituciones políticas y las económicas regionales, y los grupos transnacionales —expresado en corporaciones transnacionales— ejercen un poder político y económico para controlar los Estados y las economías subordinadas de la periferia y semiperiferia del sistema internacional. Sin embargo, por poderosos que sean, deben actuar esencialmente de manera cooperativa con las élites estatales y socioeconómicas locales. De esta manera, los factores internacionales condicionan en gran medida la producción de los países en vías de desarrollo, pero en raras ocasiones los determinan.

Exclusión, poder y movilización

El argumento de que los últimos ciclos de protesta en América Latina fueron reacciones defensivas —similares a las señaladas por Polanyi— contra la expansión de una versión contemporánea de la sociedad de mercado depende de poder demostrar dos circunstancias. En primer lugar, se debe demostrar que el neoliberalismo generó una exclusión política y económica importante que fomentó las demandas de esa reacción. Una literatura cada vez mayor sobre los efectos del neoliberalismo demuestra que sus reformas económicas crean una exclusión social y económica significativa, lo que provoca cambios negativos en la situación de las clases de trabajadores urbanos y rurales, y en la clase media (Huber y Solt 2004). Los cuatro casos que hemos mencionado aquí suponen que la acumulación de estas condiciones fomenta los ciclos de movilización. Como norma, el sector informal de los trabajadores estalló por la privatización, la desindustrialización, la disminución de las entidades

20 Mann (1986, volumen 2); Rueschemeyer, Stephens y Stephens (1992). Para conocer una interpretación novedosa del impacto de las fuerzas internacionales, véase Acerneaux y Pion-Berlin (2005).

públicas y los servicios estatales, el interés de establecer restricciones fiscales, el énfasis en las materias primas agrícolas y, de manera muy significativa, la postura antisindicalista y fuertemente a favor de una fuerza de trabajo flexible (Pérez 2005). Este sector se caracteriza por condiciones de trabajo precarias, empleos por cuenta propia en trabajos y comercio de servicios de bajo nivel, ganancias bajas e inestables, ningún beneficio y la ausencia de contribuciones de impuestos. Además, las tasas de desempleo abierto se mantuvieron altas en comparación con el período nacional populista, mientras que la concentración de ingresos aumentó al igual que, como en la mayoría de los casos, la pobreza. Las mejoras en el salario real promedio, en casos como Bolivia, no redujeron el sentido de exclusión, debido a que una reducida proporción de la población activamente económica lo ganaba. Los salarios en el sector informal en expansión estaban, por lo general, muy por debajo del promedio. Por último, el aumento en la concentración de ingresos y de las tierras eran corolarios del modelo de desarrollo neoliberal.

Los grupos sociales subalternos también sufrieron de exclusión política. La literatura sobre la democratización presenta abundantes pruebas de que la democracia liberal los marginó de los canales institucionales ejecutivos y legislativos del Estado, a través de los cuales exigían sus demandas, lo que los excluyó del proceso de creación de políticas. Sin embargo, podían, y así lo hicieron, presentar sus reclamos por derechos ciudadanos. Esto fue eficaz, en especial para las organizaciones indígenas, las organizaciones que defendían los derechos de las mujeres y grupos ambientalistas, siempre y cuando no hubiese problemas de propiedad implicados.²¹

En segundo lugar, el argumento tiene que demostrar que los cambios en las relaciones de poder provocaron que el descontento derivado de la exclusión política y económica se tradujera posteriormente en un ciclo de política contenciosa en Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela. Esto implica la existencia de fenómenos asociados, como una debilidad económica compuesta por crisis económicas, una disminución en el poder político y, tal vez, en el poder militar. Nuevamente, nuestros casos respaldan esta hipótesis. En los cuatro

21 Aunque la política social pudo haber tenido algunos efectos redistributivos positivos, fueron demasiado pequeños para compensar los altos niveles de desigualdad en la región. Véase Stallings y Peres (2000: 150). Por lo tanto, supongo que las posibles mejoras en la prestación de servicios y en los gastos del sector social fueron demasiado leves para compensar las características de exclusión que implicaban las políticas neoliberales de economía y laborales. Dado que esto anula su efecto potencial, me centro en la exclusión económica y política y sus consecuencias como las reacciones defensivas establecidas por Polanyi.

casos, la recesión mundial y las crisis económicas nacionales debilitaron aún más las fuentes económicas transnacionales y nacionales que respaldaban el neoliberalismo, que ya estaba debilitado por un rendimiento económico irregular y producto de un débil mercado laboral en el sector formal. En la medida que el Estado cedió la responsabilidad económica al mercado, el ejercicio efectivo del poder económico privado de parte del capital fue decisivo para la construcción del orden neoliberal. El poder económico basado en el capital transnacional y nacional dependía de su capacidad para atraer inversiones, crear empleo y producir crecimiento económico. La inestabilidad y las crisis económicas, generalmente (pero no siempre) vinculadas a las fluctuaciones internacionales, socavaron la capacidad del sector privado para hacerlo. Así se debilitó su capacidad de ejercer control sobre los grupos sociales subalternos. La inestabilidad del crecimiento económico exacerbó las deficientes condiciones de trabajo, en especial durante las bruscas recesiones que frecuentemente producían un masivo desempleo, además de subempleos ubicuos en un sector informal cada vez mayor. Bajo estas condiciones, el mercado —la fuente del capital de control social— tuvo dificultades para “capturar” personas en la red de las interacciones sociales, como señala Mann (1986, volumen 2).

En tanto, los estados democráticos liberales estructurados para respaldar el neoliberalismo sufrieron una deflación de poder por dos razones. Primero, los ciudadanos experimentaron una fuerte exclusión política, dado que los nuevos partidos políticos establecidos abandonaron sus demandas económicas y sociales fundamentales, y las remplazaron por otras nuevas o generaron una inestabilidad electoral trascendental. Segundo, en algunos casos, como en Ecuador y Venezuela, y tal vez en Bolivia, las fuerzas políticas que habían implementado políticas neoliberales perdieron el control parcial del poder militar.

Por el contrario, el poder de los grupos sociales subalternos se fortaleció drásticamente en la medida que su capacidad organizativa y de formar coaliciones aumentaba, debido a que inventaron medios eficaces de contención y, en algunos casos, debido al aumento en el poder militar mediante alianzas con facciones de las fuerzas armadas. Las organizaciones variaron en gran medida en todos los casos, pero los procesos implicaron la formación de nuevos movimientos sociales, nuevos partidos políticos y nuevos sindicatos, que se complementaron con los que ya existían. Con el tiempo, la coordinación entre las nuevas organizaciones y las ya establecidas aumentó considerablemente en la mayoría de los casos. Al mismo tiempo, el estado democrático liberal los protegía de la represión masiva debido a su compromiso

con la tolerancia al disenso público. Además, los militares —o la policía—, que ya no estaban completamente bajo el control de un régimen civil, se rehusaban a reprimir con vehemencia.

Argentina

Las reformas neoliberales fueron la principal prioridad de la presidencia de dos períodos de Carlos Menem (1988-2000) y se mantuvieron durante la breve administración de Fernando de la Rúa (2002). En un comienzo, estas reformas generaron beneficios. Desde 1991 hasta 1998, Argentina gozó de altas tasas de crecimiento económico y fuertes entradas de inversiones extranjeras. Una baja inflación, que constituyó un logro importante debido a la historia de inflación galopante, y las mejoras en los salarios reales, caracterizaron el período entre 1990 y 2002.

Sin embargo, las políticas económicas neoliberales también generaron cambios en la situación de muchas personas que se vieron excluidas y perdieron sus beneficios. Aunque la economía crecía, la concentración de ingresos aumentó. En 1980, el 20% más pobre recibía el 6,8% del ingreso nacional, mientras que el 10% más rico obtenía un 30,9%. Estas cifras empeoraron a 5,4% y 35,8% respectivamente en 1997. En 2002, la cuota del quintil más pobre disminuyó a 5,2%, mientras que el decil más alto se alzaba a un 40,7%. A partir de 1997, la concentración de ingresos se produjo principalmente en detrimento de los sectores medios. Además, aunque los salarios reales estaban aumentando, aún eran al menos un cuarto o un tercio más bajos que en 1980. Los datos de sobreempleo y pobreza eran incluso más drásticos. Las tasas de desempleo abierto, con un promedio cercano al 15,5% entre 1994 y 2004, eran el doble más altas que en la década del 80 (y el triple en comparación con los años 70). Al mismo tiempo, un poco más de la mitad de las personas con empleo pertenecían al sector informal de la economía, hasta cinco veces la cantidad que había en la década del 70, dependiendo de la fuente. De la misma manera, las tasas de pobreza urbana —que casi se habían triplicado entre 1980 y 1990— volvieron a aumentar más del doble entre 1990 y 2002, disparándose desde un 21% a un 45% durante el punto máximo de la crisis económica.²²

22 Recopilé estadísticas de crecimiento económico, distribución de ingresos, pobreza y salarios del *Anuario estadístico* de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Santiago: CEPAL, 1985-2003); las estadísticas de trabajo son del *Panorama laboral: América Latina y el Caribe* de la Organización Internacional del Trabajo (Lima: OIT, 1994-2004); las cifras del sector informal de la década de los 70 son de Thorpe (1998).

La exclusión política en el estado democrático liberal de Argentina adoptó diversas formas. Argentina tenía un sistema de partidos con dos fuerzas principales y una naciente coalición. Por un lado se mantenían el partido Justicialista tradicional y la Unión Cívica Radical (UCR) y emergía un nuevo partido de centro izquierda denominado Frente País Solidario (FrePaSo). La administración de Carlos Menem, irónicamente del partido tradicional Justicialista –a favor de los trabajadores–, obtuvo una importante independencia del poder legislativo mediante una ley del Congreso que le garantizó una amplia libertad de acción para resolver los problemas económicos de Argentina. Menem complementó este poder, gobernando a través de decretos cada vez que fuese necesario, con el fin de evitar al Congreso en temas propios de la agenda neoliberal y que fuesen controversiales, como era la privatización de empresas públicas. La administración de Fernando de la Rúa, una alianza del partido Radical y el FrePaSo que asumió el cargo en enero de 2000, ofreció muy poco en temas de inclusión. Mantuvo el eje central de la política monetaria de Argentina: una tasa de tipo de cambio respecto al dólar, lo que garantizó el ajuste automático de la economía en Argentina.²³

En una situación de exclusión política persistente, los cambios en las condiciones sociales y en los patrones de exclusión económica descritos anteriormente, en especial los relacionados con el empleo, generaron en un comienzo movilizaciones defensivas contra las políticas neoliberales, similares a las descritas por Polanyi, bajo la forma del movimiento piquetero. Los piqueteros eran principalmente trabajadores estatales despedidos por las empresas privadas o víctimas de los recortes de gasto público; a ellos se unieron personas que sufrían los problemas de desempleo estructural de largo plazo.²⁴ A comienzos del invierno de 1996, los piqueteros se movilaron en pueblos de las provincias del sur y el norte, y en el Gran Buenos Aires, tras masivos despidos en las nuevas empresas petroleras privatizadas (que eran los empleadores principales).²⁵ Los piqueteros interrumpieron el comercio

23 Para más información sobre las políticas argentinas, véase Corradi (1985); Levitsky (2003). Murillo (2000) sostiene que los trabajadores argentinos tenían voz en las reformas neoliberales. Sin embargo, es importante observar que los sectores principales de los trabajadores argentinos se rehusaban a participar y formaron una nueva confederación del trabajo, que tuvo un papel importante en el ciclo de movilización en el país.

24 Para más información sobre el movimiento piquetero, véase *Entre la ruta y el barrio: La experiencia de las organizaciones piqueteras* de Svampa y Pereyra (2003).

25 Young, Guagnini y Amato (2002).

regional al bloquear caminos y carreteras. Sus demandas se centraban en el empleo, pero también abordaban políticas sociales, como el trabajo, la salud, la educación y la distribución de alimentos. También pedían libertad para crear organizaciones sociales alternativas mediante la administración de fondos de desempleo para realizar campañas de recolección de alimentos, construir consultorios, escuelas y mantener el orden público.

Entonces, los desafíos para el neoliberalismo surgen primero en regiones, donde el poder económico del capital se ha debilitado –por la privatización y por el empleo devastado– a raíz de la reducción en el gasto público, que no ofrece inversiones nuevas suficientes para generar nuevos trabajos de calidad comparables, o ni siquiera algún trabajo. El desempleo y subempleo concentrados convenció a las personas de que no podían encontrar soluciones a sus problemas solamente en el mercado, lo que debilitó la capacidad del mercado –y del capital– para controlar el conflicto social. Por el contrario, la formación de los piqueteros marcó un aumento en el poder organizativo de los grupos sociales excluidos de los beneficios de las políticas neoliberales. En la medida en que las zonas deprimidas económicamente estuvieran aisladas en un contexto de cifras globales de crecimiento económico positivas, las movilizaciones dependerían de ellas.

Un cambio en la economía global modificó esta condición. La crisis económica mundial iniciada en Asia a finales de los 90 y comienzos de los 2000 produjo una fuerte contracción dentro de Argentina, lo que debilitó significativamente el poder económico del capital (se registraron bajas en las inversiones, en el crecimiento y en el empleo). El gobierno de Fernando de la Rúa en un comienzo aplicó políticas restrictivas para enfrentar esta crisis. Presionado por el Fondo Monetario Internacional, De la Rúa implementó rigurosas políticas de estabilización económica, que respaldaban la tasa de tipo de cambio fija en abril del 2000. La reducción masiva del sector público produjo más desempleo y otras adversidades (como pagos irregulares a los empleados públicos). La situación económica en Argentina empeoró durante 2001, en especial luego de que el FMI suspendiera los préstamos por no cumplir las reducciones en gasto fiscal y ejerciera presión en el gobierno para devaluar la divisa. Fugas de capital masivas y una retirada significativa de valores en cartera para convertir cuentas en dólares a pesos, debilitaron aún más el poder económico del estado democrático neoliberal. A comienzos de diciembre de 2001, el ministro de economía Domingo Cavallo –el arquitecto de la tasa de tipo de cambio fija– cerró los bancos y congeló todas las

cuentas, atrapando los ahorros de muchas personas en bancos en quiebra. El *corralito*, como se le apodó, se sumó al desempleo, que ya alcanzaba el 20%, lo que impulsó la pobreza urbana, que a su vez afectaba al 45% de los hogares –o más–. Además, aumentó bruscamente la concentración de ingresos.

En este contexto de masiva exclusión política y económica, las movilizaciones defensivas contra el neoliberalismo, similares a las descritas por Polanyi, comenzaron primero con los piqueteros en 1996 y se intensificaron hasta formar un ciclo de movilización en el 2000 y 2001. Durante este período el poder de las manifestaciones creció dramáticamente, impulsado por la capacidad asociativa y las nuevas formas de acciones colectivas disruptivas. En el 2000, los efectos sociales producidos por la intensificación de la recesión y las políticas de estabilización fomentadas por el FMI gatillaron manifestaciones masivas en todo el país.²⁶ Los piqueteros desarrollaron acciones contra el neoliberalismo con una facción de trabajadores organizados de carácter más militar, la Confederación de Trabajadores Argentinos (CTA). Sus demandas reflejaban las características defensivas de las movilizaciones propuestas por Polanyi. Exigían protección ante despidos y recortes de salario, y propusieron aumentos en los pagos de entre un 6% y 8% anual, además de pagos mensuales de 350 pesos por persona desempleada en el hogar (alrededor de un millón).²⁷ También protestaron contra la exclusión política, proponiendo una elaboración de presupuesto participativa similar a la de Porto Alegre.

En diciembre de 2001, una crisis económica cada vez más profunda, el *corralito* y el rápido deterioro de las condiciones sociales, detonaron una movilización social a nivel nacional entre el 12 y el 20 de diciembre, incluido Buenos Aires, que culminó en la renuncia del presidente De la Rúa la tarde del 20 de diciembre. El cenit del ciclo de protestas contra el neoliberalismo en Argentina constituyó un aumento exponencial en el poder asociativo de los manifestantes. Todos los trabajadores organizados, principalmente la confederación de trabajadores más grandes (la CGT), se unieron a la CTA y a los muy bien organizados piqueteros. De igual forma lo hicieron minoristas de clase

26 Las cifras oficiales de desempleo abierto aumentaron casi un uno por ciento de un 14,3% en 1999 a un 15,1% en el 2000 (además de un aumento de más del uno por ciento del año anterior). Una disminución en el empleo del sector informal empeoró la situación. Para conocer más sobre estas movilizaciones, véase a Rubén Laufer y Claudio Spiguel, "Las 'puebladas' argentinas a partir del 'santiaguino' de 1993: Tradición histórica y nuevas formas de lucha," en López Maya (1999).

27 Editorial, "La crisis argentina," *En Defensa del Marxismo*, 29 (enero de 2001).

media organizados, personas de clase media en general y pequeños agricultores. Su repertorio de acciones disruptivas se amplió al realizar paros generales, ataques y tomas de edificios gubernamentales, ataques a corporaciones privadas –principalmente bancos–, disturbios que implicaban enfrentamientos con la policía y saqueos; todas estas acciones se sumaron a los tradicionales bloqueos de caminos y cacerolazos de la clase media. Estas manifestaciones nacionales masivas, seguidas de otras más durante los años siguientes –dado que las condiciones económicas empeoraron aún más–, contribuyeron a que el candidato del partido Justicialista Néstor Kirchner fuese elegido presidente. Representaba una facción del partido que deseaba enfrentar al FMI y comprometerse con una reforma del neoliberalismo.

Las pruebas de que estas movilizaciones tienen el carácter defensivo señalado por Polanyi son contundentes. La clase media interpretó el congelamiento de los depósitos bancarios como un robo de políticos corruptos e incompetentes. Las personas que trabajaban en el sector informal dependiente del dinero –más de la mitad de la economía– vieron que sus ganancias se redujeron casi a la mitad durante el primer mes del congelamiento. Entonces, las demandas se centraron en el castigo a los políticos corruptos (protección ante la exclusión política), en el descongelamiento de los depósitos bancarios (protección ante los bancos internacionales y nacionales), en que el gobierno enfrentara al FMI (protección ante políticas recesivas) y pusiera fin a la privatización, al recorte de gastos para el sector público y al recorte de salarios; y, por último, en el cumplimiento de todas las demandas sindicales sobre empleo que se realizaron el año anterior.

Bolivia

Luego de la democratización en 1982, el período neoliberal de Bolivia se desplegó con mayor fuerza en 1985, con el establecimiento de lo que se denominó la "Nueva Política Económica". Los partidarios citaron con orgullo sus logros reflejados por las cifras globales. Bolivia gozó de un crecimiento constante del PIB entre 1991 y 1998. Incluso durante el receso económico mundial entre 1999 y 2002, el crecimiento siguió siendo positivo, aunque mucho menor. Los salarios promedio reales aumentaron más del doble entre 1990 y 2002. En el mismo período, la distribución del ingreso permaneció prácticamente igual; de hecho, el quintil más pobre mejoró en cierto modo, a pesar del gasto en el sector medio, mientras que la parte del 10% más rico se mantuvo virtualmente igual.

Los niveles de desempleo abierto en la década del 70 se mantuvieron; y posteriormente, entre 1991 y 1998, el empleo aumentó. Sin embargo, estos datos agregados enmascaran una debilidad fundamental del poder económico del capital en Bolivia, a pesar de la ausencia de una crisis económica masiva, como la de Argentina. Las extraordinarias cifras de los bolivianos no incluían ganar un sustento sostenible; de esta forma, el mercado no podía controlarlas completamente. Los niveles de pobreza se mantuvieron por sobre el 60% de los hogares (más del 50% en zonas urbanas y solo un poco menos del 80% en zonas rurales). En tanto, entre 1970 y 1990 el empleo informal urbano se disparó de un 15% a un 56,9% y volvió a aumentar nuevamente a un 66,7% en 2002.²⁸

Al igual que en Argentina, la exclusión política de los temas de políticas económicas más importantes fue intensa. A partir de 1985, hubo un consenso en torno a las políticas sociales y económicas neoliberales desarrolladas entre los tres partidos principales de Bolivia: el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), la Acción Democrática Nacionalista (ADN) y el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR). Estos partidos ganaron las elecciones presidenciales formando alianzas electorales y de gabinete ministerial. Así, se excluyó de manera eficaz al poder legislativo de la participación en críticas al neoliberalismo. Esta situación se mantuvo hasta alrededores de 2003, cuando las movilizaciones masivas obligaron a Gonzalo Sánchez de Lozada a renunciar a su segundo gobierno.

Incluso más fuertes que en Argentina, los cambios negativos en la situación de las clases y la exclusión mostraron fuertes patrones regionales, que se correlacionaron con los centros de las manifestaciones. Los centros de desarrollo tradicionales en el Altiplano, en los departamentos de La Paz, Oruro, Cochabamba, Potosí y Chuquisaca, fueron desplazados desde el punto de vista del desarrollo económico por los departamentos de las tierras bajas: Santa Cruz y Beni (Altamira 2003). Gran parte del cambio se debía al descenso de la industria del estaño en favor del petróleo y el gas. La industria del estaño era propiedad del Estado y llevaba un tiempo en descenso, pero en la era neo-

28 Recopilé estadísticas de crecimiento económico, distribución de ingresos, pobreza y salarios del *Anuario estadístico* de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Santiago: CEPAL, 1985-2003); las estadísticas de trabajo son del *Panorama laboral: América Latina y el Caribe* de la Organización Internacional del Trabajo (Lima: OIT, 1994-2004); las cifras del sector informal de la década de los 70 son de Rosemary Thorpe en *Progreso, pobreza y exclusión: Una historia económica de América Latina en el siglo XX* (Washington, D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo, 1998).

liberal muchas minas fueron cerradas y cerca de tres cuartos de los mineros perdieron sus trabajos. De este modo, cerca de 30 mil personas engrosaron las cifras de desempleados y muchos se trasladaron a la remota región de Chapare, en el departamento de Santa Cruz, para cultivar coca legal o de otro tipo. Chapare se transformó en el centro de una de las organizaciones sociales más activistas en las luchas que se desarrollarían posteriormente. Mientras tanto, los cambios en el desarrollo de la agricultura modificaron las estructuras de empleo entre el campesinado y fomentaron la movilización en el campo. El sector tradicional de la agricultura, que se centraba en el Altiplano, perdió competitividad, dado que se favorecían los cultivos de exportación agrícola, principalmente en los departamentos de Santa Cruz y Beni.

En cuanto a los trabajadores rurales, este cambio aumentó la flexibilización del trabajo; el campesinado perdió sus tierras, créditos y mercados para los cultivos y, por lo tanto, se transformó en un trabajo temporal o que no dependía de un ingreso fijo. A medida que los campesinos quedaban sin trabajo en el campo, aumentaron las cifras de empleo informal en los pueblos y ciudades locales (Kay 2004). De esta manera, las organizaciones de campesinos en la región del Altiplano, pero en especial las del departamento de La Paz, en las cercanías del Lago Titicaca, formaron una de las corrientes principales de manifestaciones en Bolivia. Las demandas económicas de los sectores sociales bajos se superpusieron fuertemente con las demandas étnicas, dado que gran parte del campesinado era indígena. Sus organizaciones se unieron en torno a demandas de sectores obreros desde las décadas del 60 y 70, pero en la medida en que las políticas de clase perdieron relevancia adoptaron la identidad étnica como un principio de organización, sin dejar de lado sus demandas basadas en su origen social (Albó 1997).

Estos cambios sociales, junto con la exclusión económica y política, avivó el fuego de las manifestaciones desde 1985 hasta 2002. Sin embargo, un cambio cualitativo ocurrió entre el 2000 y 2002, cuando dos ciclos de protesta masiva afectaron al país profundamente. Estos fueron la Guerra del Agua (de febrero a abril de 2000) y la Guerra del Gas (de septiembre a octubre de 2002). Debido a los límites de espacio de este capítulo, me centraré en la Guerra del Gas, porque fue la más extensa y la más importante en términos políticos.

Cuando Gonzalo Sánchez de Lozada comenzó su segunda administración en 2002, el poder económico del capital había sido afectado debido a la confrontación económica internacional desatada por la crisis financiera de Asia y la consiguiente renovación de las políticas de estabilización económica. Aunque

el crecimiento económico no se volvió negativo, el PIB per cápita sí lo hizo, las tasas de desempleo aumentaron cada vez más, y los niveles de empleo informal ascendieron a casi el 68%. Como resultado, la capacidad del capital para "capturar" a las personas en la red de relaciones de mercado se debilitó significativamente en comparación con los años "buenos": de 1991 a 1998. Los bruscos aumentos en la exclusión generados por las políticas de estabilización adoptadas en enero y febrero de 2002 dieron paso a manifestaciones contra las políticas neoliberales aplicadas, produciendo fuertes enfrentamientos con la policía: muchos manifestantes fueron asesinados y heridos (Assies y Salman 2003, Assies 2004).

Al deterioro económico se sumó una fuerte erosión del sistema político. Los votantes abandonaban constantemente los partidos establecidos para ser parte de los nuevos. El Movimiento al Socialismo (MAS), liderado por Evo Morales, y el Movimiento Indígena Pachakutik, de Felipe Quispe (MIP), conectados estrechamente con la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), se convirtieron en los más importantes. De hecho, representaban un gran desafío para la campaña presidencial de Sánchez de Lozada, seguidos de cerca por el MAS (Rivera 2004).

Después de las manifestaciones de comienzos de 2002 surgió la Guerra del Gas durante el mismo año, después de que el gobierno de Sánchez de Lozada anunciara que seguiría los planes de la administración anterior; es decir, vender gas natural —que era propiedad de empresas internacionales— a California a través de un puerto chileno. La guerra comenzó en el departamento de La Paz, en el que se encuentra la ciudad capital y el suburbio de la clase trabajadora de El Alto; el conflicto se expandió rápidamente a otros departamentos y ciudades afectadas del Altiplano, como Cochabamba, Oruro, Sucre y Potosí. Las movilizaciones masivas también involucraron a Santa Cruz, donde los agricultores de coca se manifestaron contra los programas de erradicación militarizada patrocinados por Estados Unidos, al igual que en oposición a las políticas de empleo, sociales y económicas neoliberales en general (Altamira 2003).

La Guerra del Gas se asoció con un crecimiento constante en el poder asociativo y disruptivo de aquellos que desafiaban el orden neoliberal. Esto implicó un aumento en la cantidad y los tipos de organizaciones, la diversidad de grupos sociales que movilizaron y la coordinación entre ellos. Las organizaciones y grupos sociales incluían sindicatos campesinos, sindicatos de trabajadores urbanos en los sectores de fabricación, minería, educación y

del Estado, partidos políticos, indígenas y movimientos cívicos que organizaron a los trabajadores informales en poblaciones callampas y vecindarios de clase trabajadora. Aunque las organizaciones y los partidos políticos que participaban en el movimiento tenían sus propios objetivos, los unía su oposición al neoliberalismo.

El ciclo de protesta de la Guerra del Gas comenzó a mediados de septiembre de 2002. Los campesinos de Warisata, organizados por el CSUTCB de Quispe, bloquearon los caminos en la región del Titicaca, secuestrando un convoy de buses de turismo. Exigían la liberación de camaradas en prisión, buscaban una compensación por los problemas que afectaban a los campesinos y también protestaban contra la política del gas natural. En contribución a la lucha del CSUTCB, la Confederación Obrera Boliviana (COB) y el partido de centroizquierda de Evo Morales, el MAS, con una sólida base de cocaleros, coordinaron movilizaciones masivas para protestar contra la política del gas natural en una serie de ciudades. Entre las acciones disruptivas —cada vez más intensas— estaban las marchas masivas y bloqueo de caminos en La Paz y otras ciudades. Luego del 20 de septiembre, la sangrienta represión estatal que sufrieron los grupos que secuestraron los buses de turistas desencadenó movilizaciones campesinas que bloquearon todos los caminos alrededor del Altiplano. La COB llamó a un paro que movilizó a profesores, mineros, estudiantes y empleados universitarios. Los bloqueos de caminos y las manifestaciones se intensificaron en El Alto y el norte de la región de La Paz y, el 10 de octubre, se expandieron a otros sectores afectados del Altiplano, como Cochabamba, Oruro, Sucre y Potosí. Debido a la conexión entre el MAS y las organizaciones de cocaleros, las protestas también se propagaron hasta Santa Cruz. Además del problema del gas natural, los manifestantes exigían la renuncia del presidente Lozada. El poder disruptivo de los manifestantes aumentó, dado que los bloqueos del camino de El Alto desconectaron a La Paz del exterior, mientras los trabajadores y los estudiantes realizaban manifestaciones a diario. En El Alto, el poder asociativo de los manifestantes creció. La Central Obrera Regional —rama regional de la COB—, en coordinación con las organizaciones campesinas, los estudiantes, los trabajadores y las asociaciones de vecindarios, hicieron un llamado a un "paro cívico" que paralizó la ciudad (Assies y Salman 2003).

Sánchez de Lozada perdió rápidamente el respaldo político dos días después de la represión (11 y 12 de octubre), que dejó más de 50 muertos, en un sangriento enfrentamiento entre manifestantes y la policía por

el control sobre el camino que conecta El Alto con La Paz. El vicepresidente Carlos Mesa retiró su apoyo al presidente. El ministro de economía Jorge Torres (MIR) renunció. El 15 de octubre, intelectuales defensores de los derechos humanos y trabajadores de ONG comenzaron una huelga de hambre. El 17 del mismo mes, dos partidos clave del gobierno de Losada, la Nueva Fuerza Republicana (NFR) y el MIR, también retiraron su apoyo, obligándolo a renunciar (Assies y Salman 2003). Mesa formó un gobierno provisional que prometió resolver algunas de las preocupaciones del movimiento popular y Evo Morales ganó las elecciones presidenciales a fines de 2005.

Como en el caso de Argentina, las demandas de los manifestantes demostraron que sus acciones constituían reacciones defensivas contra el neoliberalismo similares a las señaladas por Polanyi. Desde el comienzo de la Nueva Política Económica y, por supuesto, durante la Guerra del Gas, los sindicatos de trabajadores tradicionales organizados por la COB hicieron llamados a realizar huelgas generales en protesta contra las políticas de estabilización del FMI, la privatización y la desnacionalización, debido a su impacto negativo en el empleo, los salarios, las condiciones de trabajo y los precios de servicios básicos. Los sindicatos de profesores y estudiantes protestaban contra las políticas de reforma educacional; los grupos de indígenas y campesinos protestaban contra las políticas agrarias neoliberales, dado que temían perder los derechos de sus tierras; los mineros protestaban contra la privatización de la minería que favorecía a las empresas internacionales. Los grupos de medianos y bajos ingresos protestaron contra los altos precios del gas y la privatización de los servicios públicos. Los agricultores de coca, en especial los que habían sido mineros que migraron a Chapare, se volvieron cada vez más militantes, equiparándose con los programas de erradicación patrocinados por Estados Unidos, que contaban con la complicidad de Bolivia en la promoción del neoliberalismo de Washington bajo la forma de globalización.

En conjunto, la Guerra del Agua y la Guerra del Gas transformaron las demandas locales, regionales o específicas de los sindicatos contra la privatización y en defensa de la coca, en demandas nacionales centradas en la soberanía, el control estatal de los recursos naturales, políticas a favor del empleo del sector formal y de los derechos de los trabajadores, la reforma agraria, la desmilitarización de la guerra contra las drogas y el llamado a una asamblea constituyente (Rivera 2004; Blanco 2001).

Ecuador

Al igual que Bolivia, Ecuador comenzó su programa de economía neoliberal a mediados de los 80, pero lo aplicó con mucha menos consistencia que cualquiera de los casos anteriores. El crecimiento económico desde 1990 hasta 1997 mejoró por sobre el de la década anterior, con un crecimiento constante pero modesto. Los salarios reales promedio, que habían disminuido abruptamente en la década del 80, comenzaron a recuperarse y, finalmente, sobrepasaron los niveles de esos años en 1994, alcanzando su punto máximo al año siguiente. Mientras tanto, la pobreza disminuyó de un 62% a un 56% entre 1990 y 1997. El desempleo abierto se mantuvo constante con el desempleo en la década del 80, con un promedio de 7,6% entre 1990 y 1995. A pesar de estas mejoras, se mantuvieron altos niveles de empleo informal, con un promedio de 56,2% entre 1990 y 1997 (los años buenos), en comparación con casi un 15% en la década del 70. Los salarios mínimos en 1997, al mismo tiempo que se recuperaban de las bajas alcanzadas en los 80, eran solo la mitad de lo que eran en los 70. Además, la distribución de ingresos empeoró constantemente. En 1990, el decil más pobre obtenía el 2,1 % del ingreso nacional y el decil más alto, el 30,5%. En 1997, estas cifras se mantuvieron en 2,3% y 32% respectivamente, y en 2002 disminuyeron a 1,8% y 34,3%. Asimismo, las políticas económicas neoliberales afectaron fuertemente a los sectores rurales, principalmente indígenas (entre el 20 y 25% de la población). En 1995, el 73,2% estaba por debajo de la línea de la pobreza y el 36,7% en condiciones de indigencia, en comparación con un 55% y un 10% en las zonas urbanas.²⁹

La exclusión política en Ecuador fue menor a la observada en Argentina o Bolivia. Contaba con sistema multipartidista, aunque con partidos políticos débilmente institucionalizados, donde las administraciones de turno aceptaban o buscaban reducir el impacto de las reformas de corte neoliberal. Aquellos que las aceptaban excluían a los grupos afectados adversamente, dado que gobernaban por decreto. Aquellos que querían disminuir las reformas económicas neoliberales terminaban

29 Recopilé estadísticas de crecimiento económico, distribución de ingresos, pobreza y salarios del *Anuario estadístico* de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Santiago: CEPAL, 1985-2003); las estadísticas de trabajo son del *Panorama laboral: América Latina y el Caribe* de la Organización Internacional del Trabajo (Lima: OIT, 1994-2004); las cifras del sector informal de la década de los 70 son de Rosemary Thorpe en *Progreso, pobreza y exclusión: Una historia económica de América Latina en el siglo XX* (Washington, D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo, 1998).

siendo forzados a implementarlas de cualquier modo y también gobernaban por decreto.³⁰

Aunque las estadísticas socioeconómicas globales mostraban cifras modestas pero favorables, enmascaraban altos niveles de exclusión, particularmente en lo concerniente al salario mínimo. Esto generó frecuentes movilizaciones contra las políticas neoliberales desde 1990 hasta el 2000. Los mercados simplemente no estaban lo suficientemente desarrollados para mantener a las personas concentradas en buscar soluciones personales a los problemas dentro del mercado. De este modo, el poder del capital para garantizar la tranquilidad era débil. Además, al igual que en Bolivia, las movilizaciones masivas en Ecuador tenían un núcleo indígena importante, que era en gran medida de origen rural y que tenía demandas culturales y económicas. Durante 1999, la movilización masiva aumentó hasta ser un ciclo de contención prolongado que culminó en un golpe de Estado contra el presidente Jamil Mahuad, el 21 de enero de 2000.

Los manifestantes contra el neoliberalismo construyeron un poder de asociación importante entre 1990 y 1997, en la medida en que trabajadores urbanos y rurales, y la clase media, se unieron al núcleo indígena. En 1990 y 1994 Ecuador experimentó el primer y el segundo Levantamiento Indígena, como se les denominó. Estos demostraron un alto grado de coordinación entre las numerosas organizaciones indígenas de las tierras bajas tropicales y los pueblos del altiplano andino. La coordinación posibilitó la creación de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE). Además de las demandas culturales, protestaron contra la política neoliberal que amenazaba los derechos de propiedad de las tierras comunales. En 1995 y 1997, las movilizaciones masivas reunieron cada vez más organizaciones de indígenas, trabajadores y clase media. La movilización de 1995 se organizó para realizar una campaña contra el referéndum de la administración de Bucaram acerca del conjunto de políticas neoliberales. En 1997, las prolongadas movilizaciones obligaron a Bucaram a renunciar (Collins 2004).

Al igual que en Argentina y en Bolivia, el receso económico mundial impulsado por la crisis financiera asiática de fines de los 90 redujo el poder económico del capital en Ecuador, lo que aumentó bruscamente la exclusión. De este modo, la capacidad del mercado para mantener la tranquilidad de

³⁰ Para conocer más sobre las políticas económicas, la política y las movilizaciones en Ecuador, véase Zamosc (1994).

las personas se debilitó aún más. La debilidad económica obligó al gobierno a implementar políticas de estabilización económica. Estas deterioraron aún más los estándares de vida y fueron el foco del sentido de exclusión económica y política de los ecuatorianos, y de una injusticia inherente al orden neoliberal. El impacto negativo causado por la crisis financiera había comenzado el año anterior: en abril de 1999 el gobierno congeló los depósitos bancarios de cuentas de más de \$500 por un año, a fin de detener la retirada masiva de los fondos de los bancos. Esto agravó la crisis económica existente y el PIB disminuyó abruptamente un 9,5% en 1999. Ni siquiera las estadísticas socioeconómicas globales pudieron enmascarar la exclusión, ya que el desempleo abierto se disparó hasta un 15% en 1999, en tanto que el empleo informal alcanzó un punto máximo de casi el 59% en 1998 –no se registraron cifras para 1999– y el salario real comenzó a deteriorarse constantemente desde 1998. En medio de estas dificultades, como parte del programa de estabilización económica, entre otras medidas, el gobierno de Mahuad buscó reducir los subsidios para combustible y electricidad.

Estas medidas gatillaron una serie de movilizaciones entre marzo y julio de 1999 que demostraron los altos niveles de poder asociativo entre los manifestantes. En marzo, surgieron movilizaciones a nivel nacional en 10 zonas del Altiplano y en seis provincias de la Amazonia, en las que participaron la CONAIE, taxistas y conductores de buses. Estas movilizaciones fueron apoyadas por las clases medias: médicos y profesores se unieron a ellas. En julio, las organizaciones indígenas de la zona central y norte del Altiplano, respaldadas por las organizaciones de trabajadores y profesionales de clase media, organizaron una marcha en Quito para obligar al presidente a negociar. El ciclo de contención alcanzó su clímax en enero de 2000. En medio de una crisis económica cada vez más profunda, el gobierno recurrió a una política inflacionaria para pagar la deuda en 1999, y el 9 de enero de 2000 propuso la adopción del dólar como la divisa nacional. Esto produjo el surgimiento de un tercer Levantamiento Indígena, el 21 de enero, que demostró un impulso cualitativo del poder asociativo de los manifestantes contra el orden neoliberal. En esta instancia, la CONAIE trabajó conscientemente con trabajadores organizados, específicamente con la Coordinadora de Movimientos Sociales (CMS), que incluía a organizaciones de trabajadores del sector informal y sindicatos del sector público (Collins 2004).

No obstante, un aspecto digno de atención fue el hecho de que el Estado perdió temporalmente el control del poder militar mientras los manifestantes

lo ganaban. Aproximadamente 400 oficiales del ejército rompieron la cadena oficial de mando y respaldaron la coalición formada por la CONAIE y la CMS. Con la inclusión del poder militar, esta amplia alianza destituyó a la fuerza al presidente Jamil Mahuad. Con todo, el Estado ganó rápidamente el control sobre los militares y el vicepresidente constitucional retomó el control del gobierno (O'Conner 2003). Pero finalmente, el coronel Lucio Gutiérrez, uno de los líderes del golpe, fue elegido presidente en 2002.

Las demandas de los manifestantes respaldan el argumento de que estas movilizaciones fueron reacciones defensivas, parecidas a las señaladas por Polanyi en búsqueda de una protección ante el mercado. Desde 1990, la CONAIE y sus afiliados presionaron para obtener una reforma agraria y la legalización de los territorios indígenas; también se opusieron a las leyes —como la Ley de Desarrollo Agrario— y a la explotación del petróleo a cargo de corporaciones transnacionales, que amenazaban el sustento de los campesinos. A partir de 1995, los sindicatos de trabajadores, las clases medias y la CONAIE protestaron contra las reformas neoliberales que reducían el empleo del sector público, los salarios y que dismantelaban las leyes laborales progresistas. Las demandas relacionadas con el ciclo de contención, que culminó en un golpe de Estado fallido, en enero de 2001, se cristalizaron alrededor de los siguientes puntos: el restablecimiento de los subsidios, la capitalización de entidades estatales que daban crédito a los agricultores y campesinos pobres y el rechazo a la base en Manta relacionada con el Plan Colombia de Estados Unidos. Era, claramente, un rechazo al neoliberalismo. Las demandas indígenas consistían en el aumento del presupuesto de entidades estatales que habían sido creadas para resolver asuntos indígenas, fondos para un sistema de riego, soluciones para las tierras y demandas por recursos naturales pendientes y para los conflictos sobre los derechos del agua, además del establecimiento de diversas comisiones que garanticen que el gobierno siguiera completamente los tratados.

Venezuela

Venezuela introdujo las reformas económicas neoliberales a comienzos de la segunda presidencia de Carlos Andrés Pérez (1989) y, precariamente, durante la segunda presidencia de Rafael Caldera (fines de 1998). Durante esos 10 agitados años la población sufrió cambios masivos en las condiciones sociales y económicas. La volatilidad arruinó el crecimiento del PIB, que en ocasiones era constante, dado que la economía se contrajo durante cuatro años durante ese período. El desempleo abierto era casi el doble del más alto de la década

del 70 y el trabajo informal urbano se disparó de un 16% en 1970 a un 38,8% en 1990; y luego aumentó constantemente a un 48% en 1997. La pobreza total —urbana y rural— aumentó de un 21% en 1980 a un 38% en 1994, y disminuyó levemente a un 36% en 1997. Los salarios promedio eran tres veces menores en los años 90 que en los 80, y el salario mínimo se redujo a la mitad. La concentración de ingresos creció constantemente. En 1980, el 20% más pobre ganaba el 6,9% del ingreso nacional, mientras que el 10% más alto recibía el 21,8%. En 1990, esas cifras fueron de un 5,7% y un 28,4% respectivamente, y de un 5% y un 32,8% en 1997. Estos datos respaldan la conclusión de Kenneth Robert, quien sostiene que a pesar de que las condiciones de miseria económica comenzaron en la década del 80, con la crisis de la deuda, esta “aceleró rápidamente la creación de las políticas de ajuste estructural a finales de la década”.³¹

La exclusión política en la que había esencialmente dos sistemas de partidos siguió en un comienzo un patrón similar al de Argentina. Carlos Andrés Pérez, apoyado por la Acción Democrática —un partido que tenía fuertes lazos con los trabajadores organizados—, simplemente promulgó una serie de decretos para implementar reformas neoliberales, evitando de esta forma al poder legislativo. Aunque la administración de Rafael Caldera estaba conformada por una coalición compuesta por pequeños partidos de centro izquierda, no los tomó en cuenta durante su gobierno. Para implementar las reformas neoliberales y los programas de ajuste económico, buscó y obtuvo “leyes habilitantes” del Congreso para lidiar con la crisis económica. En otras palabras, al igual que en Argentina, el Congreso abandonó su función legislativa. De este modo se eliminaron las vías de participación política para que los sectores afectados negativamente por las reformas neoliberales pudieran participar en la creación de políticas.³²

Entre 1979 y 1985, el poder económico del Estado y el sector privado socavó en siete años de crecimiento sin variaciones o negativo del PIB una enorme deuda y un aumento en la inflación, seguidos de la devaluación del

31 Recopilé estadísticas de crecimiento económico, distribución de ingresos, pobreza y salarios del *Anuario estadístico* de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, (Santiago: CEPAL 1985-2003); las estadísticas de trabajo son del *Panorama laboral: América Latina y el Caribe* de la Organización Internacional del Trabajo (Lima: OIT, 1994-2004); las cifras del sector informal de la década de los 70 son de Rosemary Thorpe en *Progreso, pobreza y exclusión: Una historia económica de América Latina en el siglo XX* (Washington, D.C.: Interamerican Development Bank, 1998); también véase Roberts (2003, 59).

32 Para conocer visiones generales de la política en Venezuela, véase Crisp (2000); Ellner y Hellinger (2004); Louis Goodman et al. (1995).

bolívar en 1984. Tras este débil desempeño económico, los cambios masivos en la situación de clases y una exclusión cada vez mayor, reflejada en los datos mostrados anteriormente, fomentaron reacciones defensivas contra el neoliberalismo, como las descritas por Polanyi, desde el momento en que el presidente Pérez anunció un programa de ajuste estructural en febrero de 1989 (este incluyó alzas en los precios de la gasolina y del transporte público). Los disturbios y saqueos generalizados estallaron el 29 de febrero de 1989, en lo que se denominó el Caracazo. Después de unos días el gobierno envió al ejército a reprimir los saqueos: entre 246 y 1.500 personas aproximadamente perdieron la vida (López Maya 2004).

Aunque los disturbios espontáneos no se adecúan estrictamente a la definición de ciclos de movilización, las protestas se intensificaron entre 1989 y 1992 y contribuyeron a dos intentos fallidos de golpe de Estado y a la elección de Hugo Chávez, uno de los líderes del Golpe, como presidente, en diciembre de 1998. En la medida en que el poder económico del Estado y del sector privado disminuyó, debido a la crisis económica, el poder asociativo de los manifestantes aumentó durante el ciclo de manifestaciones organizadas posteriores al Caracazo, entre mayo de 1989 y 1992. Además, la coordinación —después del anuncio de las políticas de ajuste estructural— y sus demandas políticas y económicas avalan su naturaleza defensiva y la búsqueda de protección ante el mercado. En mayo de 1989, la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) —la agrupación dominante en el país— coordinó la oposición popular al programa de austeridad del gobierno mediante la organización de un paro nacional de 24 horas —el primero en 31 años—, con el fin de demandar reformas a favor de los trabajadores. En agosto de 1991, surgieron extensas huelgas y manifestaciones tras el anuncio de alzas mensuales en el precio de la gasolina, y nuevamente en octubre para protestar contra la política de la gasolina y otras partes del programa de ajuste estructural y estabilización, como la privatización, recortes de trabajos y de los pagos en el sector público, además de alzas en el precio de los alimentos y servicios básicos. En noviembre los sindicatos hicieron un llamado a paro general de 12 horas, en demanda por un aumento de salarios, el restablecimiento de los controles del precio de los bienes básicos, la rescisión de planes para despedir a 300.000 empleados estatales y el fin de las alzas del precio de la gasolina. Muchas personas murieron en los enfrentamientos contra las fuerzas de seguridad, lo que provocó aún más disturbios durante diciembre (Ellner 2004).

Mientras el poder asociativo de los manifestantes aumentaba, las capacidades del Estado se deterioraban y perdía su monopolio sobre las fuerzas de coacción. Las movilizaciones extensas y constantes contra el neoliberalismo de 1991 contribuyeron a un intento de golpe de Estado el 4 de febrero de 1992 por parte del grupo MBR-200 (Movimiento Revolucionario Bolivariano-200) del ejército, en el que el teniente coronel Hugo Chávez Frías surgió como un líder importante. Entre los motivos para la rebelión estaba la pre-ocupación sobre una creciente polarización social y la concentración de la riqueza —aumento de la desigualdad— como resultado del SAP, las políticas de estabilización y la corrupción en el gobierno. Aunque el golpe de Estado falló, los disturbios sociales continuaron en marzo de 1992 con una serie de manifestaciones que llamaban a la renuncia del presidente Pérez. Las manifestaciones contra la estabilización y las políticas de libre mercado del gobierno, al igual que la corrupción, se intensificaron en septiembre y octubre de 1992 y culminaron en un segundo intento fallido de golpe de Estado por parte de la fuerza aérea y la armada, el 27 de noviembre de 1992 (López Maya 2004).

A pesar de las maniobras del presidente Caldera para recuperar el control sobre las fuerzas armadas mediante el indulto a los oficiales que lideraron los intentos de Golpe, sus esfuerzos por reconstruir una base sólida de poder político no sirvieron. De acuerdo con los datos electorales, los venezolanos dejaron de votar por los partidos políticos —COPEI y Acción Democrática (AD)— luego del desastre de 1989. A su vez, Caldera fracasó en el intento de establecer un medio electoral nuevo y estable. Por el contrario, en julio de 1997 Hugo Chávez fundó su propio partido político, el Movimiento Quinta República (MVR), para competir en las elecciones presidenciales de 1998. Y ganó. El apoyo electoral de los venezolanos a Chávez y su partido marcó el comienzo de una nueva trayectoria para el país (Salamanca 1999).

Conclusión

Los últimos ciclos de política contenciosa en América Latina constituyen reacciones defensivas similares a las descritas por Polanyi contra la expansión de una sociedad de mercado que es parte de la construcción de un orden neoliberal. Las reformas neoliberales contribuyeron a la creación de una sociedad de mercado, dado que subordinaron las estructuras políticas y sociales a las necesidades de una economía impulsada por los principios de mercado. En este orden, el Estado estableció una relación cercana con la economía, protegió los derechos de la propiedad privada, atacó las organizaciones sociales de clase

y redujo la protección social y económica de los ciudadanos al mínimo. A pesar de que se mantuvo una forma democrática, eliminó la mayor cantidad posible de oportunidades que permitían a las fuerzas sociales participar en la creación de políticas. Bajo estas condiciones, los grupos sociales subordinados —trabajadores, campesinos, indígenas y sectores de la clase media— fueron impactados por las políticas neoliberales en términos de cambios abruptos y negativos en su condición de clase y en la exclusión económica, social y política. Estas son las motivaciones impulsoras tras los desafíos contemporáneos del neoliberalismo en América Latina, en los que los grupos sociales subordinados buscaban protección contra lo que representa la imposición de una sociedad de mercado.

Debido al sentido de exclusión política y económica que producen las retribuciones del modelo de desarrollo neoliberal, las demandas de los grupos sociales movilizados tenían características económicas y no económicas. Las demandas económicas se centraron en el mantenimiento y la restauración de los derechos laborales y los subsidios que habían prevalecido durante el período nacional populista. Otro conjunto de demandas se centró en la restauración de una función económica más activa del Estado, lo que significaba el fin de las políticas de privatización y la desregulación. Los manifestantes exigían la protección del empleo y el acceso a servicios de calidad. Recuperaron visiones nacionalistas de desarrollo y las utilizaron en contraposición al internacionalismo —o desnacionalización— inherente al dominio de las corporaciones transnacionales en sus economías.

Las demandas defensivas no económicas incluían reclamos de derechos políticos y, en las zonas donde los indígenas y las divisiones raciales eran importantes, derechos culturales. Las demandas políticas se centraron en la inclusión en la toma de decisiones, lo que implicaba políticas importantes para las vidas de los grupos subalternos. Esta fue la reacción contra su exclusión en las democracias liberales que había implementado el neoliberalismo. Este anhelo está presente en las exigencias de una asamblea constituyente de algunos de los casos vistos. En los dos casos con una población indígena considerable (Bolivia y Ecuador), los llamados a una autonomía étnica —pero no una separación— expresaron la defensa de las culturas amenazadas. Sin embargo, estas exigencias culturales claramente se traslapan en gran medida con las demandas materiales.

¿Dónde yace la debilidad de la “sociedad de mercado” liberal, que no puede contener las fuerzas sociales de las movilizaciones, y dónde yace la fuerza de estas últimas? En todos los casos el neoliberalismo sufrió una pérdida de poder

económico, lo que es clave para mantener el orden una vez que el neoliberalismo margina al Estado de sus funciones económicas (empresas públicas, planificación industrial y bienestar social). Los altos niveles de desarrollo nunca se materializaron ni crecieron significativamente: el otro lado de la exclusión económica. Esto disminuyó significativamente la capacidad del capital para “atrapar” a las personas en una red de relaciones de mercado, en la medida en que estas perdían las esperanzas de que el mercado podría proporcionar soluciones a sus preocupaciones de sustento. De hecho, el problema parecía ser el mercado. Como resultado, las crisis económicas —de origen internacional o nacional— desencadenaron las condiciones de las movilizaciones. En algunos casos, los regímenes neoliberales también perdieron el apoyo de las fuerzas armadas y, en los últimos dos, perdieron el poder político a través de los cambios en el sistema de partidos. Los movimientos, a su vez, construyeron poder asociativo mediante el fortalecimiento de organizaciones, alianzas y coaliciones entre sí y con partidos políticos nuevos o existentes.

Al analizar los grupos de las movilizaciones y los orígenes de sus demandas aislados unos de otros, como lo hace gran parte de la literatura, se pierden aspectos importantes. Los últimos ciclos de política contenciosa muestran que la fuerza social representa un desafío para un orden —una versión neoliberal de la “sociedad de mercado”— que se percibe como injusto. De este modo, respaldan la hipótesis de Polanyi sobre el doble movimiento de las sociedades capitalistas. Esto significa que las prescripciones para desarrollar políticas que buscan perfeccionar las instituciones económicas, sociales y políticas del neoliberalismo no están bien diseñadas. La evidencia sugiere que el neoliberalismo produce las mismas condiciones que causan las movilizaciones masivas y los ciclos de protesta: una amplia exclusión económica y una exclusión política. Esta última está impulsada en gran medida por la necesidad de mantener políticas económicas distributivas y una planificación económica de la agenda política nacional.

Como consecuencia, los movimientos sociales y políticos formaron nuevas organizaciones, que sustituyeron a las existentes y crearon vínculos entre sí. La densidad de trabajar en red ha aumentado con el tiempo, en especial durante los ciclos de movilización, y en respaldo de las políticas electorales nacionales, como lo demostraron las victorias electorales de Néstor Kirchner en Argentina, Evo Morales en Bolivia, Lucio Gutiérrez en Ecuador y Hugo Chávez en Venezuela. A ellos se sumó Ignacio “Lula” da Silva en Brasil y Tabaré Vázquez en Uruguay. Todos formaron lo que se ha denominado la “marea rosa” en

América Latina, el auge de fuerzas políticas que buscan una reforma del neoliberalismo y una defensa de la democracia social en lugar del socialismo o fascismo revolucionario (que también fue el resultado preferido en el análisis de Polanyi del movimiento doble de la sociedad capitalista). Cuánto pueden lograr mediante el tipo de reforma es, desde luego, otro tema. Lo que está claro es que la reforma de la "sociedad de mercado" neoliberal se ha impuesto de lleno en la agenda política de América Latina una vez más.

Bibliografía

- Acerneaux, Craig y David Pion-Berlin. 2005. *Transforming Latin America: The International and Domestic Origins of Change*. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.
- Albó, Xavier. 1997. "Ethnic Identity and Politics in the Central Andes: The Cases of Bolivia, Ecuador, and Peru". En Burt y Mauceri; James Petras, "Latin America: The Resurgence of the Left". *New Left Review* 223 (Mayo y Junio).
- Anglade, Cristian y Carlos Fortín (eds.). 1985. *The State and Capital Accumulation in Latin America*. Pittsburgh: Pittsburgh University Press.
- Arrighi, Giovanni y Beverley Silver. 1999. *Chaos and Governance in the Modern World System*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Assies, Willem y Ton Salman. 2003. *Crisis in Bolivia: The Elections of 2002 and their Aftermath*. University of London, Institute for Latin American Studies.
- Assies, Willem. 2003. "Bolivia: A Gasified Economy". *European Review of Latin American and Caribbean Studies* 76 (Abril); "Month in Review: Bolivia". *Current History* 102 (663; Febrero).
- Blanco, Daniel. 2001. "Los dos alzamientos que conmovieron a Bolivia". *En defensa del marxismo* 29 (Enero).
- Block, Fred. 2003. "Karl Polanyi and the Writing of the Great Transformation". *Politics and Society* 32 (3; Septiembre).
- Burt, Jo-Marie y Philip Mauceri (eds.). 2004. *Politics in the Andes: Identity, Conflict, Reform*. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.
- Corradi, Juan. 1985. *The Fitful Republic: Economy, Society, and Politics in Argentina*. Boulder: Westview Press.
- Crisp, Brian. 2000. *Democratic Institutional Design: The Powers and Incentives of Venezuelan Politicians and Interest Groups*. Stanford: Stanford University Press.
- Diamond, Larry. 1999. *Developing Democracy: Towards Consolidation*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Eckstein, Susan Eva y Timothy P. Wickham-Crowley (eds.). 2003. *Struggles for Social Rights in Latin America*. Nueva York: Routledge.
- Edwards, Sebastian. 1995. *Crisis and Reform in Latin America: From Despair to Hope*. Oxford: Oxford University Press, 1995.
- Elliott, Leslie y Phillippe Faucher. 2002. "We Have a Consensus: Explaining Political Support for Market Reforms in Latin America". *Latin American Politics and Society* 44 (2; Verano).
- Ellner, Setve. 2004. "Introduction: The Search for Explanations", En *Venezuela*, Ellner y Hellinger. Europa World Yearbook.
- Ellner, Steve y Daniel Hellinger (eds.). 2003. *Venezuelan Politics in the Chavez Era*. Boulder: Lynne Rienner Publishers, 59.
- Foweraker, Joe. 2005. "Toward a Political Sociology of Social Mobilization in Latin America". En *Rethinking Development in Latin America*, Charles H. Wood y Bryan R. Roberts (eds.). University Park: The